

**SENTENCIA DEFINITIVA****(Alimentos)**

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver los autos del expediente número **1281/2018** relativo al procedimiento especial de alimentos definitivos que promueve ***** en representación de su hijo *****¹, en contra de ***** , sentencia que hoy se dicta, y;

CONSIDERANDO:

I. El artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señala:

“Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Cuando el juicio se siga en rebeldía, deberán verificar de oficio, la existencia de los elementos para la procedencia de la acción.”

II.- Esta juzgadora tiene competencia para conocer de la presente causa tramitada en la vía de procedimiento especial de conformidad con lo previsto en el artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 38 del mismo ordenamiento legal, así como por lo que señalan los artículos 135, 137, 138 y 139 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que la actora se sometió tácitamente al haber comparecido a juicio presentando demanda y el demandado no suscitó explícita controversia sobre la competencia de este juicio, siendo que la competencia por territorio es prorrogable.

III. Es procedente la vía intentada por ***** en virtud de que el ejercicio de alimentos definitivos se encuentra sujeta a los procedimientos especiales, previstos por el Título Décimo Primero del Código Procesal Civil del Estado, siendo procedente la vía intentada por la parte actora.

IV. Fijación de la litis.

La actora ***** , demanda a ***** por el pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hijo ***** , así como por el pago de gastos y costas.

¹ Inicialmente debe puntualizarse que, en virtud de que en el presente asunto, se involucran derechos de un menor de edad, en el transcurso de la presente sentencia y en las actuaciones subsecuentes que al efecto se practiquen en el proceso, **únicamente se insertarán sus iniciales** al momento de hacerse referencia a ella atento a lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando el numeral X de las Directrices sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos, así como el Capítulo VII del Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas, y el Capítulo II, denominado “Principios generales para la consideración de las y los juzgadores”, y Capítulo III, denominado “Reglas Generales para las y los Juzgadores” relativo a los puntos 6 y 7, referentes a la “Privacidad” y a las “Medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes”, estos del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda edición (2014); lo anterior, a fin de proteger la intimidad, bienestar físico, y mental de los niños, niñas y adolescentes, por lo que **se ordena se omita la publicación de los datos personales del infante en la lista de acuerdos del juzgado y en todo acto judicial que al efecto se practique en la causa.** Así mismo, se prohíbe a las partes en el presente juicio revelen la identidad de los menores de edad que participan en este proceso, así como de la divulgación de cualquier otro material o información derivada del mismo juicio, que conduzca a su identificación.

Argumenta en esencia, que sostuvo una relación con el demandado de la cual se procrearon al menor *****, siendo que desde el nacimiento de su hijo, ***** ha hecho caso omiso de cumplir con todas las obligaciones alimenticias y económicas respecto a su hijo, refiere que el demandado se ha abstenido de proporcionar una pensión alimenticia para su hijo, siendo que sus gastos son altos y ella no los puede solventar. Afirma que actualmente ella no tiene un empleo, ni apoyo económico por parte de su familia, por lo que no puede solventar los gastos de su hijo, los cuales han llegado a ser superiores a *****, motivos por los que considera que sin el apoyo del demandado no le es posible llevar a cabo la manutención de su hijo.

Así, mediante sentencia interlocutoria de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, se condenó a ***** al pago de una pensión provisional a favor de su hijo *****, por la cantidad equivalente al quince por ciento (15%) de sus percepciones.

Emplazado que fue el demandado ***** *-tal y como se desprende de la cédula de notificación que obra foja ochenta y dos de los autos-*, dio contestación a la demanda interpuesta en su contra negando la procedencia de las prestaciones reclamadas, señaló que desde el nacimiento de su menor hijo ha solventado sus necesidades, aportando para su manutención, y que si bien ha tenido discusiones con la actora, es porque no lo deja convivir con su hijo; señala que ***** se ha negado a proporcionarle un comprobante para justificar sus pagos, por otro lado dijo que de decretarse el porcentaje solicitado por su contraria se le estaría dejando en un completo desamparo económico, al igual que a su diversos acreedor *****.

Por otro lado, dijo que no es solo él quien se encuentra obligado a proporcionar alimentos a su hijo, siendo que el hecho de que su éste sea menor de edad, no exime a ***** de su obligación de proporcionarle alimentos.

En este rubro, debe decirse que lo manifestado por las partes, se tiene por reproducido como si a la letra lo fuere, en obvio de espacio y tiempo, considerando además que su transcripción no constituye un requisito formal que de manera indispensable deba consignar la presente sentencia en términos del artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

V.- En tales términos queda fijada la litis planteada en este juicio, la cual se centra en determinar, conforme a lo dispuesto por los artículos 324, 325 y 333 del Código Civil del Estado, la necesidad que tiene el menor de edad *****, de recibir alimentos de parte de *****, así como la posibilidad económica del demandado para proporcionarlos.

VI.- Estudio de la legitimación.

La actora *****, se encuentra legitimada para demandar en la vía y forma que lo hace, en términos de los artículos 324, 325 y 337 fracción II del Código Civil del Estado, en virtud de que con el atestado expedido por la Dirección del Registro Civil del Estado, y que es visible a foja siete de los autos, cuyo valor probatorio es pleno



conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se tiene por demostrado que las partes en este juicio procrearon a ***** , quien nació el ***** , por lo que cuenta ***** de edad, y en ese sentido, tiene derecho para pedir alimentos al demandado en representación de su hijo, en términos de lo dispuesto por los artículos 324 y 325 del Código Civil del Estado, pues los alimentos subsisten hasta en tanto los acreedores tengan necesidad de ellos, teniendo ***** con la sola promoción del juicio la presunción de necesitarlos.

VII.-Valoración de las pruebas.

Así, ***** , para demostrar los hechos constitutivos de su acción de alimentos definitivos, conforme lo dispuesto por el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ofreció medios de convicción, siendo los siguientes:

Documentales en vía informe, a cargo de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, Institución Bancaria denominada SCOTIABANK INVERLAT, S.A., Institución Bancaria denominada Banco del Bajío, S.A., Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, Institución Bancaria denominada Banco Santander (México) S.A., Institución Bancaria denominada HSBC México, S.A, Institución Bancaria denominada Banco Inbursa, S.A., pruebas que en nada favorecen, pues en audiencia celebrada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, la parte oferente se desistió en su perjuicio del desahogo de dichas pruebas.

Documental en vía de informe –foja 149-, consistente en el informe rendido por la Jefa de Departamento de Registro de Vehículos, de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, del que se desprende que no se localizaron vehículos inscrito a nombre de ***** .

Documental en vía de informe –foja 152-; consistente en el informe rendido por el Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, prueba que con independencia del valor probatorio con el que cuenta, en nada beneficia a la parte actora, pues la institución de que se trata no proporcionó la información solicitada, en virtud de que no se proporcionó el número de seguridad social del demandado, así como sus datos, tales

como lugar y fecha de nacimiento, así como Clave Única del Registro de Población (Curp).

Documental en vía de informe –foja 153-, consistente en el informe rendido por Administración General de Recaudación, Administración Desconcentrada de Recaudación de Aguascalientes “1”; cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, prueba que con independencia del valor probatorio con el que cuenta, en nada beneficia a la parte actora, pues la dependencia señalada, no proporcionó la información solicitada, refrendo que la misma debía ser solicitada a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Aguascalientes “1”.

Documental en vía de informe –foja 150-, consistente en el informe rendido por el apoderado legal para pleitos y cobranzas del Banco Nacional de México S.A., integrante del grupo Financiero Banamex; Informe al que se le asigna pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues son informaciones proporcionadas por instituciones de crédito, que no tienen ningún interés en favorecer a una de las partes en un juicio, prestan un servicio público y deben garantizar el uso de sanas prácticas bancarias que propician seguridad de sus operaciones y procuran la adecuada atención a los usuarios de tales servicios; además, dicho informe fue emitido por persona autorizada para ello, de acuerdo con la contabilidad, libros, documentos y registros de dichas instituciones de crédito, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 6º, 25, 99, 100 y 110 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 234 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que constituye una presunción de certeza, salvo prueba en contrario. No obstante lo anterior, debe decirse que con independencia del valor probatorio con el que cuenta dicha probanza, en nada beneficia a la parte actora, pues la institución de que se trata no proporcionó la información solicitada, en virtud de que no se proporcionó el registro federal de contribuyentes, así como la Clave Única del Registro de Población (Curp) del demandado.

Testimonial.- consistente en el dicho de *****, ***** y *****, desahogada en audiencia celebrada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, cuyo valor probatorio es pleno conforme a lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, suficiente para tener por demostrado que las atestes conocen a los litigantes, quienes procrearon al menor de edad *****, que ***** se encuentra estudiando para ***** en la *****, y que no trabaja, y que ***** no proporciona para la manutención de su hijo; testimonio con pleno valor probatorio, toda vez que los atestes declararon en forma clara y precisa, fueron contestes en sus respuestas, las cuales versaron sobre hechos que conocieron por sí



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

mismos y son susceptibles de ser conocidos por medio de los sentidos, además que su declaración se robustece con los demás medios de pruebas aportados en el sumario –*específicamente con el informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, valorado en párrafos subsecuentes*-.

Por su parte, ***** ofreció los siguientes medios de convicción.

Confesional, a cargo de ***** , y testimonial consistente en el dicho de ***** , ***** y ***** , pruebas que en nada favorece a la parte oferente, pues en audiencia celebrada cinco de marzo de dos mil veinituno, fueron declaradas desiertas por causas imputables al oferente.

Documentales públicas –*fojas 7 y 92*-, consistentes en los atestados de nacimiento de ***** y ***** , cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo que disponen los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, y con los cuales se acredita que los antes mencionados son hijos de ***** , y son menores de edad al haber nacido los días ***** y ***** .

En ese sentido, se tiene por demostrado que ***** y ***** , son acreedores alimenticios de ***** , por lo que éste se encuentra obligado a proporcionarles alimentos a su favor.

Documental en vía de informe –*foja 117*-, consistente en el informe rendido por el Encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social; cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, del que se desprende que ***** , no se encuentra inscrita como trabajadora bajo el régimen obligatorio del Seguro Social, pero que tiene un registro como ***** .

Documental en vía de informe –*foja 115*-, consistente en el informe rendido por la Jefa de Departamento de Embargos de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, del que se desprende que ***** no cuenta con bienes inmuebles registrados a su nombre.

Documental en vía de informe –*foja 108*-, consistente en el informe rendido por la Jefa de Departamento de Control de Ingresos, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, del que se desprende que no se localizaron vehículos inscritos a nombre de ***** .

Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto de legal y humana, pruebas que fueron desahogadas por su propia naturaleza, y las cuales se

valoran en términos de los artículos 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles, advirtiendo que en este juicio existe a favor de su diverso hijo *****, la presunción legal derivada del artículo 325 del Código Civil del Estado, en el sentido de que su padre tiene la obligación de proporcionarles alimentos.

Pruebas ordenadas por esta autoridad

En ese sentido, esta autoridad en audiencia celebrada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, tomando en consideración que en el presente juicio se reclaman alimentos para un menor de edad y a efecto de resolver respecto de todas las prestaciones reclamadas en juicio por las partes, además de que en todo momento debe velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que intervienen en los procesos de su competencia pudiendo ordenar de forma oficiosa la debida preparación y desahogo de las pruebas que considere pertinentes a fin de establecer en el presente caso no solo la condición de la habitación sino además los aspectos de las condiciones económicas, se ordenó la preparación de pruebas de manera oficiosa.²

Habiéndose recabado las siguientes pruebas:

a) y b) Documental en vía informe –foja 180-, consistente en el informe rendido por la Encargada del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, documento que se valora de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con el cual se tiene por demostrado que ***** se encuentra registrada en dicho instituto como *****; mientras que ***** tiene un estatus vigente, con un salario de ***** por parte de *****

² Adquiere sustento en las jurisprudencias con números de registro 2007719 y 2007720 respectivamente, publicadas en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, de rubro y texto siguiente: **PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).**- En el ejercicio de sus funciones, todo juzgador tiene la potestad legal de allegarse, oficiosamente, de los elementos de convicción que estime necesarios para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos que deberá dirimir en la sentencia. Lo anterior adquiere relevancia en materia familiar cuando están involucrados intereses de menores, donde la facultad se convierte en obligación, pues es evidente la intención del legislador de propiciar una mayor protección para aquéllos. Entonces, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión, con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria, el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a sus circunstancias particulares. Además, esa obligación coadyuva a solucionar un problema práctico que se presenta con frecuencia en las controversias del orden familiar, que consiste en la imposibilidad que tiene la parte actora (acreedores alimentarios), para demostrar los ingresos del demandado (deudor alimentario) y la renuencia de este último a aportar los elementos necesarios para demostrar sus ingresos.

PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).- Cuando en una sentencia se determina una obligación de pago pero no se fija la cantidad líquida que debe pagarse, para determinarla se actualiza la necesidad de tramitar un incidente de liquidación, que es un procedimiento contencioso que admite el ofrecimiento y valoración de pruebas, según lo ha determinado esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2011, de rubro: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOJAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE)."; sin embargo, el procedimiento incidental no resulta adecuado para fijar el monto de las pensiones alimentarias, pues en los juicios de alimentos, la determinación de la cantidad líquida a pagar, junto con la procedencia de la obligación, constituyen la litis a resolver en el juicio principal, de modo que antes de la sentencia deberá el juzgador contar con los medios probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno. Además, la celeridad y la brevedad de los plazos que para los incidentes de liquidación prevén las codificaciones procesales del Distrito Federal y del Estado de Veracruz, harían prácticamente imposible para el juzgador, recabar, recibir y desahogar las pruebas necesarias para normar un criterio que atendiera a los parámetros de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria.



Con lo anterior, se tiene por demostrado que el demandado cuenta con un empleo por el que recibe ingresos y por ende, puede proporcionar una pensión alimenticia a favor de su menor hijo.

c) Documental en vía informe –fojas 181 y 182-, consistente en el rendido por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Aguascalientes “1”, documento que se valora de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con el cual se tiene por demostrado que ***** , respecto al ejercicio fiscal del año dos mil veinte declaró por ingresos por sueldo y salarios ***** , siendo sus retenedores ***** , ***** , ***** y ***** .

Documental en vía informe –foja 183 y 184-, consistente en el informe rendido por el Subdirector Jurídico Laboral y Contenciosos del **Instituto de Educación de Aguascalientes**, documento que se valora de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, del que se desprende que no se encontró registro escolar en la identidad federativa respecto al menor de edad*****

V.- Estudio de la Acción.

Así las cosas, esta juzgadora considera que es **procedente** la acción de alimentos definitivos promovida por ***** en representación de su menor hijo *****.

Lo anterior es así, ya que quedó demostrado en autos que el menor de edad ***** , es hijo del demandado, quien en términos del artículo 325 del Código Civil del Estado, tiene el derecho para reclamar y recibir alimentos por parte de su padre ***** , pues tiene la presunción legal de necesitar alimentos, debido precisamente a su minoría de edad, la que le impide allegarse de recursos para sobrevivir.

Sirve de apoyo legal, por su argumento rector, la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 203, tomo XV-II, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“ALIMENTOS PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS. *Por regla general, la promoción de un juicio a efecto de existir suministro de alimentos, lógicamente presume la imperiosa necesidad de recibirlos.*”

En tales términos, y partiendo de la presunción de que el menor de edad ***** , requiere alimentos conforme a lo dispuesto por el artículo 330 del Código Civil del Estado, correspondía en todo caso al demandado y deudor alimentario acreditar que no los necesitaba por encontrarse en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 342 del Código Civil del Estado, o bien en todo caso justificar que hubiere cumplido en forma total y satisfactoria con la obligación de proporcionar alimentos para su acreedor alimentista ***** , no obstante que del informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que ***** labora para la empresa denominada ***** , con un salario registrado de ***** ; por ende, queda

acreditado el derecho que tiene el menor de edad para recibir alimentos y el incumplimiento por parte del deudor alimentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 161, 325, 330 y 331 del Código Civil del Estado, se declara procedente la acción de alimentos hecha valer en juicio.

A la anterior consideración, sirve de apoyo legal, por su argumento rector la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, tesis VI.3o.249 C, página 142 que dice:

“ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto en el artículo 1144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por analogía para la condena al pago de alimentos definitivos, se necesita: *I. Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco del matrimonio, el testamento o el contrato en el que conste la obligación de dar alimentos; II. Que se acredite la necesidad que haya de los alimentos; III. Que se justifique la posibilidad económica del demandado.* De tales elementos se deduce que corresponde al acreedor alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir el derecho que tiene a percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es, la necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba corresponde al deudor”.

Luego, si tratándose del pago de alimentos debe respetarse el criterio de proporcionalidad contenido en el artículo 333 del Código Civil del Estado y de dicho precepto se desprende que esa proporcionalidad resulta de tomar en consideración dos extremos fundamentales a saber:

1.- La necesidad de quien debe recibir alimentos.

A).- Con el atestado expedido por la Dirección del Registro Civil relativo al nacimiento de *****, queda plenamente demostrado que es acreedor alimentario de *****.

B).- En lo relativo a las necesidades del acreedor alimentario, virtud a los conceptos que señala el artículo 330 del Código Civil del Estado, esta autoridad estima que esos requerimientos en el caso que nos ocupa se concretizan en los aspectos siguientes:

En lo referente a la comida, atendiendo a que el menor de edad ***** cuenta con tres años y nueve meses, es indudable que se encuentran en la etapa de crecimiento, esto en su caso le impedirá realizar alguna actividad que le reporte algún ingreso económico a fin de subsistir, derecho a que tiene todo ser humano, por lo que requiere de alimentación balanceada y para obtenerla es indispensable que se le proporcione los recursos económicos suficientes para su alimentación.

En lo relativo al vestido, es indudable que dicho menor de edad necesita de ropa para usar en su vida ordinaria y variable según las estaciones del año, por lo que se deduce que por su edad su crecimiento es acelerado y rápidamente la ropa que se le



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

adquiere deja de quedarle, por lo que necesita constantemente adquirirla, elementos que se deben de tomar en consideración para el otorgamiento de la pensión.

En lo tocante a la habitación, debe estimarse que el lugar donde vive genera gastos respecto de los cuales se deben cubrir y que lo son relativos a pago de luz, agua y gas, así como de mantenimiento indispensable de dicho inmueble, conceptos para cuya satisfacción es indispensable que la acreedora alimentaria cuente con recursos económicos, a fin de satisfacer los mismos, existiendo la presunción de que los gastos por los conceptos referidos se realizan en forma permanente y continua; aunque, también se toma en consideración que el menor de edad habita junto con la actora *****, por lo que el demandado debe contribuir a los gastos generados en la casa donde habita su hijo, pero únicamente en la proporción que le corresponde, ya que la actora también debe contribuir con los gastos de la casa donde habitan, quien cumple con parte de su obligación de proporcionarles alimentos al tenerla incorporada a su domicilio.

Por lo que respecta a la asistencia en caso de enfermedad del acreedor alimentario, debe considerarse que requiere de asistencia médica tanto en el caso de que su salud se vea afectada por una enfermedad leve o una grave y aún en el supuesto de que sufran algún accidente que pusiera en peligro su vida, sin embargo es evidente que al encontrarse el demandado afiliado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, su hijo tiene derecho a recibir tal prestación, sin que la misma implique un costo al demandado, y por ende tal prestación no disminuye la capacidad económica de éste.

En lo relativo a los gastos necesarios para la educación y recreación, es claro que de igual manera, debe tener los recursos económicos para satisfacer sus necesidades de educación, sin que obre constancia de que actualmente el menor de edad se encuentra inscrito en alguna institución educativa; así como la recreación acorde a las posibilidades de sus progenitores.

En virtud de lo expuesto, queda plenamente demostrada la necesidad alimentaria del menor de edad ***** y que para su satisfacción, es menester que el demandado le otorgue una pensión alimenticia con carácter definitivo que sea suficiente para satisfacer todas y cada una de sus necesidades.

2.- La posibilidad del que debe darlos.

Por lo que respecta a la posibilidad del deudor alimentista *****, con las pruebas valoradas en párrafos que anteceden, quedó plenamente demostrada su capacidad económica para otorgar alimentos, pues con el informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que ***** labora para la empresa denominada ***** con un salario registrado de *****

Sin que al efecto, se pierda de vista que para efectos de fijar la pensión alimenticia que se reclama, de los ingresos brutos habrán de eliminarse únicamente

las deducciones de carácter legal, pues en su caso, el resto de las deducciones deriva de obligaciones contraídas voluntaria y unilateralmente por el deudor alimentario.

Al respecto, sirve de apoyo legal, la tesis jurisprudencial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 418, que es del texto y rubro siguiente:

“ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN POR. *Es correcta la pensión alimenticia fijada en forma porcentual a los ingresos que percibe el deudor como contraprestación a sus servicios, pues no debe perderse de vista que dicha pensión se estableció con base en el salario integrado que percibe el demandado, entendiéndose por esto no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre la renta, (Impuestos sobre Productos del Trabajo), de fondo de pensiones, y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas, pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del salario que percibe todo trabajador, sobre éstas sí debe fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los acreedores alimentistas, así como también deben de estar incluidas las percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el demandado por su trabajo en la empresa donde labora”.*

Por otro lado, debe decirse que el demandado al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, señaló que su capacidad económica se veía disminuida debido a que cuenta con otro hijo que es su dependiente económico.

Así mismo, con el atestado de nacimiento de ***** ha quedado demostrado que éste es menor de edad y es hijo del demandado, y que por tanto tiene derecho a recibir una pensión alimenticia por parte de su progenitor lo anterior de conformidad con el artículo 325 del Código Civil del Estado; situación que habrá de ser observada al fijar el monto de la pensión alimenticia que deberá otorgar *****.

VII.- Fijación de la pensión alimenticia con carácter definitivo.

Con fundamento en el artículo 333 del Código Civil del Estado, se demostró la necesidad del acreedor alimentista ***** de recibir alimentos, así como el monto de la capacidad económica del deudor alimentario, por tanto, esta juzgadora condena a ***** a pagar una pensión alimenticia definitiva a favor de su hijo menor de edad *****.

Luego, si se parte de las necesidades que tiene ***** y que la obligación de solventar dichas necesidades es de ambos padres, se considera que cada uno deberá contribuir de acuerdo a sus capacidades económicas, pues de autos ha quedado demostrado que el demandado ***** labora para la persona moral ***** , con un salario registrado de *****.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Estimándose que los ingresos económicos de ***** , son suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de sus acreedores ***** y ***** , y las propias, así como en su caso, las de diversos acreedores alimenticios, siendo que para fijar el monto de la pensión alimenticia debe considerarse además que según el artículo 325 del Código Civil de Aguascalientes, corresponde a ambos padres la obligación de cubrir los alimentos de sus hijos, y por lo tanto ***** también se encuentra obligada a contribuir al sostenimiento de su hijo, no obstante que de su escrito inicial de demanda se desprende que ésta manifestó se ***** , lo que se robustece con del informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se advierte que se encuentra registrada como ***** en dicho instituto, no obstante lo anterior, **de su Identificación oficial** -cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 90, 281, 341 y 351 de la ley adjetiva civil del Estado, ya que se trata de la reproducción de un documento público, cuyo contenido fue protestado por la accionante en juicio, identificándose plenamente ante esta autoridad-, se desprende que ésta tiene ***** años de edad, sin tener impedimento para trabajar, lo que le permite conseguir un empleo para cumplir con su obligación alimenticia respecto de su hijo, además de conformidad con lo dispuesto por el artículo 331 del Código Civil del Estado, cumple con su obligación de dar alimentos al tener a su hijo incorporada a su domicilio.

Bajo ese orden de ideas, se condena a ***** a pagar una pensión alimenticia definitiva por la cantidad equivalente al **quince por ciento (15%)**, respecto de todas las prestaciones que recibe, tanto ordinarias como extraordinarias –*restando únicamente del total de las percepciones, las deducciones de carácter legal, es decir ISR*–, en estos momentos, como empleado de la empresa *****

En el entendido, que el porcentaje fijado, no rompe con el principio de proporcionalidad y equidad, que deriva del artículo 333 del Código Civil del Estado, pues se considera que dicho porcentaje sobre todos los ingresos del demandado, es suficiente para cubrir las necesidades de su hijo, además de que al demandado ***** le resta el **ochenta y cinco por ciento (85%)** de sus percepciones, para solventar sus propias necesidades y en su caso, las de diversos acreedores alimenticios.

Al respecto, cabe mencionar que la pensión alimenticia antes señalada, se establece un porcentaje, en primer término porque el demandado tiene percepciones fijas, según las pruebas ya valoradas; y, por otro lado, fijada la pensión alimenticia en porcentaje permite el aumento o disminución de la pensión según las fluctuaciones de los ingresos del deudor alimentario.

Sirve de apoyo legal, por su argumento rector, la jurisprudencia sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 127-132, Cuarta Parte, página veintinueve, que es del rubro y texto siguiente:

“ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No es ilegal la fijación de los alimentos con base en un porcentaje, puesto que con el puede regularse la proporción debida entre las necesidades de quienes debe recibirlos y la capacidad económica de quien está obligado a cubrirlos, según los términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, que dispone: ‘Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos’; pero además de lo expresado, cabe hacer notar que el sistema de fijar alimentos señalando un porcentaje de las percepciones económicas, obviamente presenta la ventaja de eliminar la exigencia, al menos hasta cierto punto, de nuevos juicios encaminados a solicitar el aumento o disminución de la pensión alimenticia, porque el acreedor o acreedores, en efecto, una vez que obtuvieron determinado porcentaje, no tendrán que acudir a solicitar otro ante los tribunales, cada vez que aumente el grado de capacidad económica de su deudor alimentista, ni éste tendrá que pedir una disminución cuando su capacidad económica se vea menguada.”

Luego, si tomamos en cuenta la finalidad de los alimentos, es proveer a los acreedores alimentarios de lo necesario para su subsistencia y que la necesidad alimentaria se genera de momento a momento, de conformidad con lo dispuesto por los 4 Constitucional, 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 15, 43 y 44 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, considerando el interés superior del menor ***** , principio rector que rige la materia familiar, y con la finalidad de establecer las medidas necesarias para que el acreedor alimentario, se le provea en forma oportuna y completa lo necesario para su subsistencia, resulta procedente ordenar respecto de la forma de pago de la pensión alimenticia definitiva que debe cubrir el demandado ***** , que se realice mediante descuento directo que haga la fuente de trabajo del deudor alimentario, en la misma periodicidad en que reciba sus percepciones.

Lo anterior, obedece a la necesidad de que como ya se señaló, el menor de edad cuente en forma oportuna y completa con lo necesario para su subsistencia, y con el descuento que se le haga al demandado en su fuente de trabajo, existe mayor certeza y seguridad de que la acreedora alimentaria reciba la pensión alimenticia correspondiente, en forma puntual y completa, en lugar de dejar a la voluntad del deudor alimentario su cumplimiento; además, el hecho de que la fuente de trabajo del deudor alimentario, sea quien se encargue del pago de la pensión alimenticia correspondiente, permite que la acreedora alimentaria reciba en forma periódica y constante lo necesario para su subsistencia, pues de esta forma se obliga al deudor alimentario a privilegiar la obligación alimentaria que tiene con su hijo sobre cualquier otra obligación de carácter convencional.

En tal sentido, y como fue evidenciado que el demandado labora para la empresa ***** , **se ordena requerir a la apoderada legal de la misma, para que deje sin efectos el descuento del quince por ciento (15%)** que viene realizando sobre los ingresos de ***** , por concepto de pensión alimenticia provisional, ordenado en sentencia interlocutoria de siete de diciembre de dos mil dieciocho y auto de veinticinco de marzo del año en curso, y que le fuera notificado día catorce de abril de dos mil



veintiuno, y en su lugar, **proceda a descontar** la cantidad equivalente al **quince por ciento (15%)**, de todas las prestaciones, ordinarias y extraordinarias que reciba el demandado –*restando únicamente del salario bruto las deducciones de carácter legal*–, por concepto de **pensión alimenticia definitiva**, la cual que deberá entregar en la misma periodicidad que el demandado percibe sus ingresos, a *****en representación de su hijo menor de edad ***** , bajo apercibimiento que no hacerlo, con fundamento en el artículo 60 fracción I del Código de Procedimientos Civiles y 331 BIS del Código Civil, ambos del Estado, se le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 60 fracción I del Código de Procedimientos Civiles y 331 Bis del Código Civil, ambos del Estado, **y responderá solidariamente con el obligado directo de los daños y perjuicios que cause a la acreedora alimentaria por sus omisiones o informes falsos.**

VIII.- Estudio de la acción de pago de gastos y costas.

No se hace especial condena al pago de gastos y costas en perjuicio del demandado, pues con fundamento en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los numerales 325, 313 BIS, 330, 333, 439 y 440 del Código Civil, ambos del Estado, la acción de alimentos debe ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, además que el demandado limitó su actuación del proceso a lo estrictamente necesario para ser posible la resolución del juicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara que *****en representación de su hijo ***** acreditó su acción de alimentos definitivos.

SEGUNDO.- El demandado ***** , dio contestación a la demanda.

TERCERO.- Se condena a ***** a pagar a su hijo menor de edad ***** , una pensión alimenticia con carácter definitivo, por la cantidad equivalente al **quince por ciento (15%)**, de sus percepciones -*restando únicamente del salario bruto las deducciones de carácter legal*-, misma que deberá entregarse a *****en representación de su hijo menor de edad.

CUARTO.- Se **ordena requerir al apoderado legal de *******, para que deje sin efectos el descuento del quince por ciento (15%) que viene realizando sobre los ingresos de ***** , por concepto de pensión alimenticia provisional, ordenado en sentencia interlocutoria de siete de diciembre de dos mil dieciocho y auto de veinticinco de marzo del año en curso, y que le fuera notificado día catorce de abril de dos mil veintiuno, y en su lugar, **proceda a descontar** la cantidad equivalente al **quince por ciento (15%)**, de todas las prestaciones, ordinarias y extraordinarias que reciba el demandado –*restando únicamente del salario bruto las deducciones de carácter legal*–, por concepto de **pensión alimenticia definitiva**, la cual que deberá entregar en la

misma periodicidad que el demandado percibe sus ingresos, a *****en representación de su hijo menor de edad *****.

QUINTO.- No se hace especial condena al pago de gastos y costas en perjuicio del demandado.

SEXTO.- En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto de dos mil veinte, se ordena se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas de Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente y cúmplase.

Así lo sentenció y firma la Jueza de Primera Instancia en materia mixta, del Tercer Partido Judicial con sede en el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, Licenciada **Ivonne Guerrero Navarro**, quien actúa asistida de su Secretaria de Acuerdos Licenciada **Martha Patricia Hernández Castañeda** que autoriza y da fe.- Doy fe.

**LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
SECRETARIA DE ACUERDOS**

**LIC. IVONNE GUERRERO NAVARRO
JUEZA**

La resolución que antecede se publicó en Listas de Acuerdos con fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en términos de los artículos 115 y 119 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.- Conste.

L'ndm//mbvs

**LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
SECRETARIA DE ACUERDOS**

La licenciada **Nínive Díaz Macías**, Secretaria de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia ó resolución **1281/2018** dictada el **veintisiete de mayo de dos mil veintiuno** por la Jueza de Primera Instancia en materia mixta, del Tercer Partido Judicial con sede en el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, constante de **siete** fojas útiles. Versión publica elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3º fracciones XII y



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas; se suprimió: **los nombres personales, las iniciales de los menores y sus edades, los datos que se desprenden de los atestados del registro civil, las fuentes de empleo y percepciones de los litigantes, así como a los demás datos generales**, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita.- Conste.-